

UNA MIRADA AL FUTURO POST-COVID-19: HACIA UN NUEVO PACTO SOCIAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE¹

Federico Bonaglia, Sebastián Nieto-Parra y Juan Vázquez-Zamora

21 de abril de 2020

Introducción

La crisis económica y social que se está desarrollando a raíz de la pandemia de la COVID-19 (“crisis de la COVID-19”) tiene un fuerte impacto tanto por el lado de la oferta como de la demanda, así como en la cohesión social de los países.

Gran parte de los países de América Latina y el Caribe (ALC) han reaccionado con antelación para evitar la propagación del virus, y se han venido preparando para enfrentar el profundo impacto que la crisis podría tener en términos económicos y sociales. Más allá de las medidas urgentes, que comprensiblemente van a acaparar la atención de las políticas públicas por un tiempo, cabe comenzar a pensar en algunos elementos relevantes para la etapa post-COVID-19, que podría representar

una oportunidad para que la región avance en varias de las reformas estructurales que aún siguen pendientes.

Las protestas sociales de 2019 en varios países de la región, impulsadas por un profundo descontento social, aspiraciones frustradas, vulnerabilidad persistente y pobreza creciente (Nieto-Parra, Pezzini y Vázquez, 2019), revelaron la necesidad de reconstruir el pacto social y la confianza pública. La crisis exacerbará esos problemas, por lo que, más que nunca, es el momento de repensar el pacto social en la región para promover un mayor bienestar para toda la ciudadanía. En efecto, la crisis actual puede representar una oportunidad para crear un consenso entre la ciudadanía en torno a los principales desafíos pendientes, y para recuperar valores comunes como la solidaridad intergeneracional y la responsabilidad social, que actúen como un potente antídoto contra el virus invisible que es el populismo. Para ello, las estrategias nacionales de desarrollo, con la participación de todos los actores sociales relevantes,

¹ Este artículo se basa en dos publicaciones: OCDE (2020a): “COVID-19 and Latin America and the Caribbean: Regional socio-economic implications and policy priorities”, y OCDE (2020b): “Latin America and the Caribbean in the time of COVID-19: Preventing the vulnerable from falling behind”. Los autores agradecen a Nuria Álvarez la traducción al castellano de este artículo escrito originalmente en inglés.

deben tener en cuenta cómo la crisis del coronavirus puede agudizar las trampas de desarrollo ya existentes en la región (OCDE *et al.*, 2019).

Este artículo se organiza de la siguiente manera. Primero, presenta los principales canales de impacto macroeconómico de la crisis de la COVID-19 en la región. Segundo, se centra en el impacto de esta crisis en los hogares, los trabajadores y las empresas. Por último, basándose en este diagnóstico y en las condiciones sociales estructurales de la región, presenta las opciones de respuesta desde las políticas públicas que se vienen adoptando y que se podrían adoptar para apoyar la salida de la crisis y para avanzar en la reconstrucción del pacto social en América Latina.

El impacto macroeconómico está teniendo lugar a través de varios canales

De media, entre 2014 y 2019, la región ha experimentado el período de crecimiento más débil desde la década de 1950, registrando, sistemáticamente, tasas de crecimiento inferiores al promedio de la OCDE. Se prevé que en 2020 el PIB se contraerá gravemente, como consecuencia de las repercusiones económicas de la pandemia en ALC a través de diferentes canales. En primer lugar, las medidas de confinamiento inducen una gran caída inmediata de la actividad económica. En segundo lugar, las restricciones están afectando a

sectores como el turismo y los viajes internacionales, con especial incidencia en algunas economías del Caribe, donde el turismo representaba más del 20% del PIB en 2018 (CEPAL, 2020). En tercer lugar, la desaceleración global (OCDE, 2020c) y la perturbación de las cadenas de valor, mundiales y regionales, generarán una fuerte disminución de las exportaciones de ALC. En el caso de América del Sur y Centroamérica, el comercio de mercancías podría disminuir en 2020 entre el 12% y el 31% en comparación con 2019 (OMC, 2020). En cuarto lugar, el colapso de los precios del petróleo afectará a las cuentas fiscales y externas de varios países de América del Sur, así como a México y Trinidad y Tobago. A inicios de abril de 2020, los precios del petróleo habían disminuido en un 60% desde principios de año; los precios del cobre, el hierro, la soja, el azúcar y el café también han disminuido considerablemente. Por último, la volatilidad financiera, el deterioro de las condiciones financieras y las grandes fugas de capital han traído consigo una fuerte depreciación de las monedas de ALC y la reducción de los activos financieros en los mercados de deuda y de valores, lo que afecta a la solvencia de las grandes empresas de ALC. Se espera que la inversión extranjera directa (IED) disminuya entre un 30% y un 40%, reduciéndose en mayor medida en las economías más afectadas por la pandemia (UNCTAD, 2020). Las remesas disminu-

rán, con un probable mayor impacto en Centroamérica y México. Las estimaciones conservadoras reflejan que en 2020 las remesas procedentes de Estados Unidos disminuirán en un 3% (Inter-American Dialogue, 2020).

Estas perturbaciones afectan a una región en la que la mayoría de los países tienen un espacio limitado para reaccionar con políticas fiscales. Antes de la crisis de la COVID-19, el espacio fiscal de la mayoría de los países de la región ya era limitado, ya que muchas economías estaban implementando ajustes fiscales. Sin embargo, algunos países han aplicado reglas fiscales, entre ellos Chile, Colombia, México y Perú, que deberían permitir la adopción de algunas políticas anticíclicas. A pesar de la gran heterogeneidad, los ingresos tributarios siguen siendo escasos y están cercanos al 23% del PIB, más de 10 puntos porcentuales por debajo del promedio de la OCDE (OCDE/CEPAL/CIAT/BID, 2019). Además, la política fiscal ha sido ineficiente en la reducción de las desigualdades y en la promoción del emprendimiento (OCDE *et al.*, 2019; Izquierdo, Pessino y Vuletin, 2018).

En contraste con esos efectos negativos, el uso de las tecnologías digitales y la expansión de internet han sido decisivos para mantener cierta continuidad en los negocios, los empleos o la educación a distancia, aunque la brecha digital, en particu-

lar la falta de internet de banda ancha de alta velocidad, ha impedido que se beneficie toda la ciudadanía. Yendo más allá, las tecnologías digitales pueden desempeñar un papel crucial en la recuperación, al tiempo que abordan el persistente problema de la baja productividad (OCDE *et al.*, 2020).

Es necesario proteger a las familias, los trabajadores y las empresas más vulnerables

El impacto socioeconómico de la crisis de la COVID-19 puede ser grave para las personas, los hogares y las empresas si no se responde con políticas públicas ambiciosas. De hecho, la pandemia podría dejar entre 14 y 22 millones de latinoamericanos más en la pobreza extrema a finales de 2020 (CEPAL, 2020).

El impacto social podría ser particularmente difícil para el 38% de la población activa que no tienen acceso a ninguna forma de protección social. Es probable que la crisis aumente el empleo informal, que ya representa el 58% de las personas trabajadoras (OCDE/OIT, 2019). Si bien los seguros sociales y los principales programas de asistencia social de la región cubren a dos tercios de las personas trabajadoras (62%) y sus familias, incluida la mayoría de los hogares pobres, el 65% de las personas que tienen un trabajo informal no se benefician de ninguna forma de protección social. No cuentan con bajas por enfermedad ni con

prestaciones de desempleo, y tienen un acceso deficiente al seguro médico y a los servicios nacionales de salud. Esto afecta especialmente a las personas trabajadoras “vulnerables” del sector informal, aquellas que viven con entre 5,5 y 13 dólares (paridad de poder adquisitivo, PPA, de 2011) al día. Muchas de ellas trabajan por cuenta propia, en la economía de subsistencia y viven al día. Muy pocas de ellas pueden trabajar de forma remota. Entre las personas trabajadoras informales que pertenecen a este grupo “vulnerable”, el 61% no forma parte de un hogar cubierto por un programa importante de asistencia social. El riesgo de que vuelvan a caer en la pobreza es considerable. Aquí radica uno de los principales desafíos de esta crisis: proteger a este grupo de personas que trabajan en empleos informales, que son vulnerables y no tienen acceso a protección social, y evitar una expansión generalizada de la pobreza, que ya afecta al 25% de la población.

El impacto de las respuestas frente a la COVID-19 también puede ser proporcionalmente mayor para las mujeres (OCDE, 2020d). En primer lugar, dada la división tradicional de género en ALC, es probable que durante la pandemia las mujeres sufran una mayor carga física y emocional que los hombres. Las mujeres son las principales responsables de los cuidados y las que mayor tiempo diario dedican al trabajo doméstico y a los cuidados no remunerados, que es, de

media, tres veces mayor que el de los hombres en ALC (OCDE, 2019). En segundo lugar, en algunos países las mujeres pueden verse particularmente afectadas por la reducción de la actividad económica, ya que es más probable que tengan un trabajo informal. Por ejemplo, en 2018 el 58% de las mujeres en México formaban parte del empleo informal, frente al 50% de los hombres, y en Costa Rica el 39% de las mujeres eran trabajadoras informales, frente al 35,5% de los hombres. Por último, las mujeres tienen más probabilidades de estar expuestas a la violencia de género como resultado de las medidas de cuarentena y confinamiento (ONU Mujeres, 2020).

Los efectos inmediatos de la recesión económica también repercutirán sobre los migrantes que viven en los países de ALC, ya que muchos de ellos tienen condición de irregulares o trabajan de manera informal. Los migrantes en ALC se sitúan mayoritariamente en los segmentos más pobres de la población. Precisamente en este entorno de bajos recursos, tan solo el 15% de los hogares del quintil de ingresos más bajos tiene ahorros para cubrir gastos de emergencia (Messina, 2020).

Muchas empresas podrían quebrar, en particular las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que representan el 99% del total de empresas de la región y generan más de la mitad de los puestos de trabajo

(OIT, 2015; Dini y Stumpo, 2019). Las mipymes, especialmente el trabajo por cuenta propia y las microempresas, podrían verse afectadas por las consecuencias económicas de las medidas de contención, ya que disponen de menos liquidez y tienen menos margen de maniobra. Las encuestas preliminares sugieren que solo el 15% de las empresas con ventas inferiores a 5.000 dólares al mes sobrevivirán tras dos meses de confinamiento en la región (Nauta y Sistema B, 2020). De hecho, la brecha de productividad de las mipymes de ALC las hace particularmente vulnerables a los “shocks” de demanda. La productividad de las microempresas solo representa el 6% de la productividad de las grandes empresas en ALC (en la Unión Europea la productividad de las microempresas representa un 42% de la productividad de las grandes) (Dini y Stumpo, 2019). Con una productividad más baja y enfrentando, potencialmente, estructuras de costes rígidas, las mipymes tienen más probabilidades de enfrentarse a quiebras o pérdidas.

En el contexto de la crisis de la COVID-19, la brecha digital aparece como un fenómeno particularmente preocupante, ya que puede exacerbar las desigualdades existentes. Solo las personas trabajadoras, los/las estudiantes o los consumidores con la infraestructura y las competencias digitales adecuadas pueden beneficiarse de las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías. Aunque el acce-

so a las TIC ha mejorado considerablemente, las brechas persisten y pueden surgir otras nuevas (OCDE *et al.*, 2020).

Políticas públicas en tiempos de crisis: responder a lo urgente y reactivar la economía

La profunda incertidumbre en torno a la evolución de la crisis en ALC hace más compleja la respuesta de políticas públicas. El modo en que se secuencien las medidas adoptadas, así como la manera en que se prioricen los diversos objetivos de las políticas públicas, será fundamental para superar de una manera efectiva estos tiempos de crisis. Muchos países de ALC han reaccionado con rapidez adoptando medidas de distanciamiento y confinamiento social. Debido al fuerte impacto socioeconómico, varios países de la región han adoptado también políticas tanto por el lado fiscal como por el monetario, para proteger a los más vulnerables y preservar las capacidades humanas, productivas y financieras².

La política fiscal está desempeñando un papel esencial en la mitigación de los efectos económicos y sociales negativos de la pandemia y seguirá siendo fundamental para la recuperación posterior. La debilidad de los estabilizadores automáticos en la

² Para más detalles sobre estas medidas, véase el *Country Policy Tracker* de la OCDE:
<http://oecd.org/coronavirus/en/#country-policy-tracker>.

región (Espino y González Rozada, 2012), con seguros de desempleo frágiles o inexistentes, altos niveles de informalidad y bajos ingresos fiscales hacen que sean urgentes respuestas fiscales ambiciosas. En un primer momento, el objetivo de la política fiscal debería ser detener la propagación del virus mediante el apoyo a programas de prevención, detección y tratamiento, y el apoyo a la continuidad de las empresas y la protección de puestos de trabajo. La mayoría de las economías de la región ya han comenzado a implementar medidas de este tipo.

Es esencial evaluar constantemente la aplicación y la eficacia de esas medidas y reajustarlas si es necesario, especialmente las destinadas a la población más pobre y vulnerable. Esto último se hace especialmente necesario a la hora de apoyar a las personas trabajadoras vulnerables del sector informal, que no están cubiertas por ningún programa de asistencia social; se necesitan medidas políticas innovadoras, como ya se han anunciado en algunos países³. De hecho, estos esfuerzos también podrían entenderse como una oportunidad para lograr cierto grado de “formalización” de los informales, ayudando a mejorar los registros existentes o a su inclusión en el sistema bancario.

³ Véase:

<http://oecd.org/coronavirus/en/#country-policy-tracker>.

La eliminación gradual de las medidas de contención y confinamiento debe estar directamente relacionada con el monitoreo de la evolución de la capacidad de los sistemas de salud y de los datos de infecciones. Para evitar nuevos brotes locales, será esencial hacer pruebas a más personas para identificar a los infectados, hacerles un seguimiento para asegurarse de que no sigan propagando la enfermedad, y localizar a las personas con las que han tenido contacto.

En el plano económico, si bien las medidas iniciales tenían por objeto evitar nuevos aumentos de la pobreza o la quiebra de las empresas, la etapa de apertura debe enfocarse en reactivar la economía y devolverla a su plena actividad. Las principales medidas deben encaminarse al estímulo efectivo de la demanda, en particular desde el punto de vista del consumo. El tamaño de la economía informal podría crecer, aunque su naturaleza también podría ayudar a que una parte de la economía vuelva con mayor rapidez a su actividad normal. Serán necesarias medidas de apoyo específicas para los sectores más afectados, así como planes de inversión ambiciosos para estimular la reactivación de la economía. Igualmente, las políticas sociales deben seguir respaldando a los afectados, en particular a los más vulnerables y a los que pueden haber caído en la pobreza durante la pandemia.

Estas acciones implicarán la movilización de enormes recursos financieros y humanos. En el plano interno, no cabe duda de que ello dará lugar a un aumento de los déficits públicos y de los niveles de deuda pública, lo que representará un desafío para los países con una posición fiscal más débil. En este contexto, el apoyo coordinado de la comunidad internacional será vital dada la magnitud del esfuerzo y las dificultades que enfrentarán los países de ALC para financiarse en los mercados internacionales (Steiner y Gurría, 2020).

Por último, la COVID-19 podría seguir golpeando en futuras oleadas, ya sea directa o indirectamente a través del efecto sobre otras economías, por lo que los gobiernos deben prepararse de antemano para gestionar tal escenario y no solo reaccionar ante una nueva crisis.

Pensando en el futuro: convertir esta crisis en una oportunidad para construir las bases de un nuevo pacto social

Esta crisis ha llegado a ALC en un momento en que los niveles de confianza y satisfacción de la ciudadanía son particularmente bajos (OCDE *et al.*, 2019). La ola de protestas a finales de 2019 puso de relieve el aumento del descontento social y las crecientes aspiraciones por tener servicios públicos de mayor calidad y un mayor bienestar para todos y todas. La crisis de la COVID-19 podría profundizar aún más este desconten-

to, pero también puede representar una oportunidad para que surjan consensos entre la ciudadanía en torno a las principales reformas pendientes, y para recuperar valores comunes como la importancia de contar con servicios públicos sólidos y los beneficios de pertenecer al sector formal.

La crisis de la COVID-19 podría aumentar el capital político para llevar a cabo reformas estructurales. De hecho, los índices de aprobación de algunos presidentes de ALC han aumentado en el contexto de la crisis y, de media, la aprobación por su gestión se sitúa en un 58% en la región (Mitofsky, 2020). Existen varios mecanismos posibles a través de los cuales esta crisis puede favorecer procesos de reforma, tal y como muestran las lecciones aprendidas de las reformas adoptadas en pasadas crisis. Así, pueden aumentar los costes —en los frentes fiscal o social, por ejemplo— asociados al retraso en la realización de las reformas. En este sentido, una crisis puede abrir una “ventana de oportunidad” que permita llevar a cabo reformas que hasta ahora parecían imposibles (Tommasi y Velasco, 1995; Dayton-Johnson, Londoño y Nieto-Parra, 2011). Por lo tanto, en el contexto actual, los gobiernos deben aprovechar este impulso para repensar el pacto social, abordando las vulnerabilidades estructurales —las trampas del desarrollo de baja productividad, la vulnerabilidad social, las debilidades institucionales y la sostenibilidad

ambiental—, y respondiendo a las crecientes aspiraciones de la ciudadanía (OECD *et al.*, 2019). Ello significaría pasar del fragmentado *statu quo* actual a un nuevo equilibrio basado en la igualdad de oportunidades a largo plazo, que ha de ser la base de un nuevo pacto social (Larrain, 2020).

Aunque la respuesta inmediata a la crisis debe enfocarse en mitigar su impacto sobre los más vulnerables y en proteger la economía, será difícil postergar el avance en las reformas estructurales, dado el calendario electoral que viene. Las elecciones generales de 2020 en Bolivia y la República Dominicana, el plebiscito en Chile (inicialmente programado para abril y ahora aplazado hasta octubre de 2020), o las elecciones generales de 2021 en países como Ecuador y Perú son hitos fundamentales que pondrán a prueba el modelo actual de desarrollo y que representan oportunidades para repensar los fundamentos del pacto social.

Hay tres dimensiones fundamentales que deben tenerse en cuenta para este rediseño del pacto social en la región:

1. Incorporar el bienestar como objetivo principal de las políticas públicas y avanzar hacia sistemas de protección social más fuertes. Esta crisis pone de manifiesto vulnerabilidades subyacentes que las simples mediciones de ingresos, si bien importan-

tes, no logran identificar ni abordar. Las frustraciones de la ciudadanía con respecto a la calidad de los servicios públicos y los aspectos multidimensionales de la pobreza refuerzan la idea de que el desarrollo es mucho más que el PIB. Los gobiernos de la región ya han dado pasos importantes hacia la incorporación del bienestar en las políticas públicas, con un mayor alineamiento de las estrategias nacionales de desarrollo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estos esfuerzos no deben ser revertidos por la respuesta a la crisis de la COVID-19. Además, la crisis ha revelado que los actuales mecanismos de protección social pueden ser insuficientes, y que dejan a muchos ciudadanos fuera de los canales de apoyo existentes. La respuesta a la crisis debería promover soluciones innovadoras para reducir las brechas de cobertura social, proteger a la población más vulnerable, impulsar empleos de calidad, mejorar la calidad y la universalidad de la atención sanitaria y diseñar mecanismos de respuesta a las crisis cuando no haya estabilizadores automáticos.

2. Movilizar recursos para fomentar la resiliencia y financiar el desarrollo inclusivo. La crisis pone de manifiesto la necesidad de tener más recursos para financiar los servicios públicos, la protección social y la competitividad. Es necesario reformar los sistemas fiscales y de gasto público. En lo que a los impuestos se refiere, las

opciones incluyen el aumento de los impuestos directos sobre la renta de las personas físicas, principalmente aquellas con rentas altas, los impuestos sobre la propiedad, los impuestos relacionados con el medio ambiente y la eliminación de los gastos fiscales ineficientes, así como luchar contra la evasión fiscal. Esas medidas deberían contribuir a aumentar la progresividad y la recaudación total y, a la vez, contribuir a la imperiosa transición hacia una economía baja en carbono. En cuanto al gasto, se debe avanzar hacia una mayor eficiencia, evitando gastos superfluos y duplicidades, al tiempo que se debe garantizar un mínimo de ingresos para las personas más vulnerables, para que puedan planificar, hacer frente a los riesgos y realizar una transición hacia la economía formal. También se debería fortalecer la inversión para promover que las mipymes sean financiera y ambientalmente sostenibles, con una mejor inserción en las cadenas de valor locales y globales para superar la trampa de la productividad regional.

3. Definir una estrategia de desarrollo sostenible en la que participen todos los actores. Más que nunca, la crisis de la COVID-19 pone de relieve la necesidad de una coordinación y de una coherencia efectiva entre los diferentes actores para dar respuestas eficaces y sostenibles. Los países de ALC necesitan estrategias que empoderen a la ciudadanía en todas las etapas del proceso de elaboración de

políticas. En las estrategias nacionales deberían participar diferentes agentes y debería aprovecharse la variedad de conocimientos y puntos de vista que estos ofrecen, para definir políticas encaminadas a lograr mayores niveles de productividad y la creación de empleo formal en la región. La respuesta a la crisis debe ayudar a transformar el modelo de desarrollo de ALC, aprovechando las oportunidades y abordando los desafíos que conllevan dos importantes tendencias mundiales. Primero, el cambio climático, que debe convertirse en una oportunidad para dirigir el estímulo económico hacia la construcción de un modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad ambiental. Segundo, la transformación digital, que a lo largo de esta crisis está demostrando ser una herramienta para preservar ciertas actividades económicas y salvar empleos en la región, al tiempo que expone las consecuencias negativas de la brecha digital. La necesidad de impulsar una transformación digital que incluya a todas y todos es otra lección de esta crisis.

Es fundamental subrayar la importancia de coordinar una respuesta mundial para hacer frente a los efectos inmediatos, a corto y a medio plazo, de la crisis de la COVID-19. Hay al menos tres aspectos fundamentales para la acción coordinada a nivel internacional:

- El apoyo financiero es esencial, trabajando juntos y con la participación de bancos multilaterales, actores bilaterales públicos y privados, y organizaciones internacionales. Ya se está prestando una ayuda financiera considerable, y la capacidad disponible en las instituciones multilaterales es amplia. Sin embargo, sería necesario aumentarla para mantener la ayuda a medio plazo. Además, podrían considerarse diferentes alternativas para el alivio en el pago de la deuda oficial, como la que ya ha adoptado el G-20 para algunas economías menos desarrolladas. En este contexto, es fundamental una ambición similar a la del Plan Marshall, pero a nivel mundial (Gurría, 2020), en la que ALC tenga voz. Para apoyar la recuperación mundial de manera sostenible, los países desarrollados y en desarrollo, incluidos los países latinoamericanos, deberían aunar sus fuerzas y establecer un fondo de inversión mundial específico (Pezzini, 2020).

- La cooperación internacional es fundamental, y el papel del G-20 debe ser central para coordinar la respuesta a la emergencia sanitaria, pero también para la movilización de recursos financieros a nivel mundial. Además, se necesitan mecanismos de intercambio de conocimientos, diálogos sobre políticas y transferencias tecnológicas para estimular una recuperación duradera y sostenible, así como un sistema multilateral revita-

lizado en el que la región debería desempeñar un papel activo.

- La cooperación y la integración regionales aparecen como un objetivo pendiente, pero muy deseable, tanto para hacer frente a las consecuencias más urgentes de la crisis como para impulsar la recuperación y prepararse para futuros reveses. Aunque todavía es limitada en tamaño, la cooperación inmediata ya se está llevando a cabo a través de acuerdos subregionales existentes, como en el caso de Mercosur con el Fondo de Emergencia para la COVID-19.

Federico Bonaglia es director adjunto del Centro de Desarrollo de la OCDE. Sebastián Nieto-Parra es jefe para América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la OCDE. Juan Vázquez-Zamora es Economista para América Latina en el Centro de Desarrollo de la OCDE.

Traducción a cargo de Nuria Álvarez.

Referencias bibliográficas

- CEPAL (2020): “Latin America and the Caribbean and the COVID-19 pandemic Economic and social effects”, *COVID Special Report*, n° 1, Santiago. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45351/S2000263_en.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
- DAYTON-JOHNSON, J., LONDOÑO, J. y NIETO-PARRA, S. (2011): “The Process of Reform in Latin America: A Review Essay”, *OECD Development Centre Working Papers*, n° 304, París, OECD Publishing. Disponible en: <https://doi.org/10.1787/5kg3mkvfcjxv-en>.
- DINI, M. y STUMPO, G. (2019): *MIPYMES en América Latina: Un frágil desempeño y nuevos desafíos para las políticas de fomento*, Santiago, CEPAL. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44603/1/S1900091_es.pdf.
- ESPINO, E. y GONZÁLEZ ROZADA, M. (2012): “Automatic Stabilization and Fiscal Policy: Some Quantitative Implications for Latin America and the Caribbean”, *IDB Working Paper Series* n° IDB-WP-367 I, Washington D.C., BID.
- GURRÍA, A. (2020): “Coronavirus (COVID 19): Joint actions to win the war”, OCDE. Disponible en: <https://www.oecd.org/about/secretary-general/Coronavirus-COVID-19-Joint-actions-to-win-the-war.pdf>.
- INTER-AMERICAN DIALOGUE (2020): “Migrants and the Impact of the COVID-19 Pandemic on Remittances”, Washington D.C. Disponible en: https://www.lac.ox.ac.uk/sites/default/files/lac/documents/me-dia/2020_article_on_migrants_and_the_impact_of_covid-19_on_remittances.pdf?time=1584982389407.
- IZQUIERDO, A., PESSINO, C. y VULETIN, G. (2018): “Mejor gasto para mejores vidas: cómo América Latina y el Caribe puede hacer más con menos”, Washington D.C., BID.
- LARRAIN, G. (2020), “The Stability of the Social Contract in Chile: A paradoxical social explosion and its institutional responses”, Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.

- MESSINA, B. (2020): “Distanciamiento social, informalidad y el problema de la desigualdad”, *Blog Ideas que cuentan*, Washington D.C., BID. Disponible en: <https://blogs.iadb.org/ideas-que-cuentan/es/distanciamiento-social-informalidad-y-el-problema-de-la-desigualdad/>.
- MITOFSKY (2020): “COVID-19 en 11 países de Latinoamérica”. Disponible en: <http://www.consulta.mx/index.php/encuestas-e-investigaciones/el-mundo/item/1346-covid19-latam-mzo20>.
- NAUTA Y SISTEMA B (2020): “Estudio de Mercado: ¿Cómo afecta el COVID a las empresas en América Latina?” Disponible en: <https://sistemab.org/wp-content/uploads/2020/04/Result.-EncuestaLATAM-COVID-Marzo20.pptx-1.pdf>.
- NIETO-PARRA, S., PEZZINI, M. y VÁZQUEZ, J. (2019): “Social discontent in Latin America through the lens of development traps”, *Blog Development Matters*, OCDE. Disponible en: <https://oecd-development-matters.org/2019/12/23/social-discontent-in-latin-america-through-the-lens-of-development-traps/>.
- OCDE (2019): *Gender, Institutions and Development Database (GID-DB) 2019*. Disponible en: <https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=GIDDB2019>.
- (2020a): “COVID-19 and Latin America and the Caribbean: Regional socio-economic implications and policy priorities” (<http://www.oecd.org/coronavirus/en/>). Disponible en: https://read.oecd-ibrary.org/view/?ref=129_129904-k3xp17fqbl&title=COVID-19-in-Latin-America-and-the-Caribbean-Regional-socio-economic-implications-and-policy-priorities.
- (2020b): “Latin America and the Caribbean in the time of COVID-19: Preventing the vulnerable from falling behind”, *Blog Development Matters*. Disponible en: <https://oecd-development-matters.org/2020/03/31/latin-america-and-the-caribbean-in-the-time-of-covid-19->

- preventing-the-vulnerable-from-falling-behind/). <https://doi.org/10.1787/25666b8d-en-es>.
- (2020c): *OECD Economic Outlook, Interim Report March 2020*, París, OECD Publishing. Disponible en: <https://doi.org/10.1787/7969896b-en>.
- (2020d): “Women at the core of the fight against COVID-19 crisis”, París, OECD Publishing. Disponible en https://read.oecd-ili-brary.org/view/?ref=127_127000-awfnqj80me&title=Women-at-the-core-of-the-fight-against-COVID-19-crisis.
- OCDE *et al.* (2019): *Latin American Economic Outlook 2019: Development in Transition*, París, OECD Publishing. Disponible en: <https://doi.org/10.1787/g2g9ff18-en>.
- (2020), *Latin American Economic Outlook 2020: Fostering development in the digital age*, París, OECD Publishing (en preparación).
- OCDE/ECLAC/CIAT/IDB (2019): *Revenue Statistics in Latin America and the Caribbean 2019*, París, OECD Publishing. Disponible en: <https://doi.org/10.1787/25666b8d-en-es>.
- OCDE/ILO (2019): *Tackling Vulnerability in the Informal Economy*, *Development Centre Studies*, París, OECD Publishing. Disponible en: <https://doi.org/10.1787/939b7bcd-en>.
- OIT (2015): *Small Enterprises, Large Gaps. Employment and Working Conditions in Micro and Small Enterprises in Latin America and the Caribbean*, ILO/Regional Office for Latin America and the Caribbean.
- OMC (2020): “Trade set to plunge as COVID-19 pandemic upends global economy”, *855 Press Release*. Disponible en: https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr855_e.htm.
- ONU MUJERES (2020): *COVID-19 en América Latina y el Caribe: Cómo incorporar a las mujeres y la igualdad de género en la gestión de la respuesta a la crisis*, Naciones Unidas. Disponible en: <http://www.lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2020/03/covid-como-incorporar-a-las-mujeres-y-la-igualdad-de-genero-en-la-gestion-de-respuesta#view>.

PEZZINI, M. (2020): “Covid-19: time to unleash the power of international co-operation”, *Blog Development Matters*, OCDE. Disponible en: <https://oecd-development-matters.org/2020/03/26/covid-19-time-to-unleash-the-power-of-international-co-operation/#more-11830>.

STEINER, A. y GURRÍA, A. (2020): “COVID-19 — How to avert the worst development crisis of this century”, *Devex* (9 de abril). Disponible en: <https://www.devex.com/news/opinion-covid-19-how-to-avert-the-worst-development-crisis-of-this-century-96962>.

TOMMASI, M. y VELASCO, A. (1995): *Where Are We in the Political Economy of Reform?*, CV Starr Center for Applied Economics, Nueva York, New York University.

UNCTAD (2020): “Impact of the Coronavirus Outbreak on Global FDI”, Ginebra, Naciones Unidas. Disponible: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diae_gitm34_coronavirus_8march2020.pdf.

Fundación Carolina, abril 2020

Fundación Carolina
C/ Serrano Galvache, 26.
Torre Sur, 3ª planta
28071 Madrid - España
www.fundacioncarolina.es
@Red_Carolina

ISSN: 2695-4362
https://doi.org/10.33960/AC_21.2020

La Fundación Carolina no comparte necesariamente las opiniones manifestadas en los textos firmados por los autores y autoras que publica.



Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)